



[:16]

Enero 2011



Dejemos el pesimismo para tiempos mejores

El movimiento vecinal tiene sus orígenes en un tiempo en el que lo que hoy nos parecen mínimos irrenunciables estaban lejos de ser alcanzados. Un tiempo donde, por exigencia también de "los mercados", disfrazados entonces de "Dios" y de "Patria", nuestra gente no tenía más derecho que el de trabajar bajo durísimas condiciones con la cabeza gacha.

Entonces se peleó duro y se demostró que una sociedad civil organizada y en movimiento es capaz de salvar los más grandes obstáculos y forzar importantes transformaciones sociales. Nunca se dejó de luchar, ni bajo las condiciones más duras.

Hace tres años, la urgencia de pensarnos, debatir y poner sobre la mesa propuestas y diferentes opciones se imponía de cara a poder afrontar el futuro más inmediato del movimiento vecinal. No sabíamos hasta qué punto. Ahora que vemos cómo los retos que tendremos que encarar en el futuro más próximo nos trascienden como movimiento y como organización, resulta fundamental haber reforzado los cimientos mediante el debate y la reflexión colectiva y contar con munición adecuada.

En poco tiempo la convulsa realidad ha ido imponiendo otras prioridades, hasta el punto de que, lo que hace apenas unos meses parecían urgencias inaplazables, quedan empequeñecidas por la dureza de las nuevas exigencias.

Como ya estamos viendo, durante los próximos años vamos a tener que enfrentar una dura ofensiva de quienes pretenden reducirnos a una mera función económica rentable. "Los mercados" nos quieren dis-

ponibles y baratos y las palabras derecho, anhelo, memoria, dignidad, sentido de la solidaridad y de la justicia... se han convertido en obstáculos que nos encarecen.

Pero no lo olvidemos, "los mercados" no dictan leyes naturales y sus designios no son inevitables ni sobrenaturales. "Los mercados" se han convertido en el eufemismo de turno para enmascarar una relación social de poder en la que los intereses de una minoría se imponen a las necesidades de la inmensa mayoría.

Frente a la ofensiva de los primeros y a la actitud sumisa de quienes nos gobiernan, debemos recordar que podemos y sabemos luchar. Que somos capaces de resistir y de transformar la realidad.

Tras cuarenta años de historia, el movimiento vecinal tiene mucho que aportar a la hora de construir las resistencias necesarias. No vamos a dejarnos llevar por el pesimismo o el sentimiento de derrota. Tenemos buenos cimientos, compañeros de viaje y determinación para trabar con otros la unidad que nos haga más fuertes frente a quienes quieren hacernos retroceder hasta el pasado más oscuro.

Tenemos ahora un reto ineludible. Uno que habla de la defensa de los derechos más fundamentales, de la propia democracia y de las condiciones que la hacen posible. Retos que nos exigen la articulación, junto con las otras organizaciones y movimientos sociales, de una amplia y tupida red de resistencias sociales que oponer al gobierno despótico de los mercados.

[: 16]
sumario

Enero 2011

Gaceta **Vecinal**



- 3. La FRAVM renueva junta directiva
- 4. La ciudadanía defiende en la calle el Estado social
- 7. Avances en la lucha contra la contaminación electromagnética
- 9. La suciedad gana terreno un año después de la implantación de la tasa de la basura en Madrid
- 11. La pestilencia de Valdemingómez llega a la fiscalía
- 12. La venta de promociones de la EMVS, "un torpedo en la línea de flotación de la vivienda social"
- 15. El metro llega por fin a La Fortuna de Leganés
- 16. La crisis como coartada
- 18. Entrevista a Javier López, secretario general de CCOO Madrid
- 20. Fronteras Invisibles: imágenes que desvelan la cara más dura de la vida de los vecinos inmigrantes.

Publicación bimestral de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)
C/ Bocángel, 2. 28028, Madrid
Tel: 91 725 29 09. Fax: 91 725 06 23
<http://www.aavvmadrid.org>
E-mail: fravm@aavvmadrid.org

CONSEJO DE REDACCIÓN: Nacho Murgui, Vicente Pérez, Isabel Rodríguez, M^a Carmen Lostal, Manuel Osuna, Carmen Míguez.

REDACCIÓN: Edurne Irigoien (fravmprensa@aavvmadrid.org) y Óscar Chaves: oscar.chaves@aavvmadrid.org

DISEÑO Y MAQUETA ORIGINAL:
Taller de diseño Traficantes de Sueños
(taller@traficantes.net)

FOTOGRAFÍA PORTADA:
Olmo Calvo

IMPRESIÓN: Asetip

DISTRIBUYE: Publigarma S.A.

DEPÓSITO LEGAL: M-24986-2006

> Boletín subvencionado por el Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.



La FRAVM renueva junta directiva

Las 271 asociaciones que conforman la FRAVM tienen una cita el próximo 27 de enero para evaluar la labor realizada los tres últimos años y elegir junta directiva. El nuevo equipo tiene por delante un mandato indefectiblemente marcado por la crisis económica y las consecuencias de la reaccionaria respuesta de unas administraciones públicas empleadas a fondo en seguir las directrices de los gurús del poder financiero a costa de los derechos de ciudadanía.



Asamblea de la FRAVM celebrada el 13 de diciembre de 2007.

El pasado año se conmemoraba el 40 aniversario del nacimiento del movimiento vecinal, uno de los actores que conquistaron, primero, y consolidaron después la democracia en España y, con ella, un corpus de derechos de ciudadanía que durante cuatro décadas se ha afanado en ejercer y defender. En la actualidad, late en el movimiento vecinal la idea de que nos hallamos en una nueva encrucijada: la de la revitalización de las asociaciones vecinales, por un lado, y la necesidad de reconquistar unos derechos nuevamente amenazados.

El actual presidente de la FRAVM, Nacho Murgui, subraya que el reto del movimiento ciudadano reside, precisamente, en convertir la amenaza en oportunidad. "La respuesta de las administraciones públicas a la crisis económica por la senda del recorte de los derechos de ciudadanía constituye una agresión sin precedentes desde hace décadas. En apenas unos meses -añade- y, en un contexto determinado por cotas históricas de desempleo que amenazan la estabilidad, no sólo económica, sino también social de nuestra Comunidad, las administraciones públicas han decidido apagar con fuego esta convulsa situación: una reforma laboral claramente lesiva para los trabajadores; la modificación del sistema de pensiones; la agresión cotidiana a las personas migrantes, convertidas en cabeza de turco de la crisis

La asamblea extraordinaria se celebrará el 27 de enero en el Centro Cultural Buenavista.

económica; la degradación y la privatización de los servicios públicos; la consolidación de un sistema fiscal que castiga a las rentas más modestas; la *jibarización* de los presupuestos de las áreas que, precisamente, se deberían reforzar para ayudar a las familias desfavorecidas, como servicios sociales, vivienda, empleo... Sin embargo, esta situación puede constituir un revulsivo para que la gente se movilice y se organice en defensa de sus comunes intereses y para que las organizaciones sindicales y sociales articulen estrategias de cooperación para responder de forma efectiva a estos retos. Ambos objetivos -concluye- están recogidos en el plan estratégico de la Federación".

Plan estratégico

Este cuaderno de ruta, definido de forma asamblearia por las asociaciones federadas, ha sido el referente de actuación del equipo directivo de la Federación durante estos tres últimos años. En lo que respecta a la organización interna, se han constituido comisiones de trabajo para dar cauce a nuevas inquietudes y necesidades, como la creación de huertos urbanos comunitarios y grupos de consumo ecológico o para trabajar de forma más específica y efectiva algunas cuestiones. Es el caso de las comisiones de Mayores o Migraciones.

La política externa se ha articulado en torno a la conformación de redes de coordinación y cooperación prestando especial cuidado en salvaguardar en todo momento la autonomía política y organizativa de la Federación. En este capítulo se ha promovido, junto a SOS

Racismo, Médicos del Mundo, Ferrocarril Clandestino, Asociación de Sin Papeles de Madrid (ASPM)..., la constitución de la Red por el Derecho a Tener Derechos, un espacio de coordinación para defender los derechos de las personas migrantes que, en el contexto de la crisis, están sometidas a un creciente acoso policial a través de redadas y detenciones basadas en criterios raciales. La comisión de Antenas de Telefonía Móvil, por su parte, participó en la creación de la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECC-CEM), constituida para incrementar el alcance de su trabajo y potenciar su capacidad de interlocución con la Administración central, responsable de la legislación que ordena las cuestiones referidas al espacio radioeléctrico. La oposición a la privatización del Canal de Isabel II o a la implantación de la tasa de la basura en Madrid conforman los ejes de otras plataformas de coordinación a través de las cuales la Federación ha tendido puentes de colaboración.

Queda, sin embargo, mucho que hacer para acercar el movimiento vecinal a las metas "volantes" establecidas en el plan estratégico. Ese será parte del quehacer del nuevo equipo directivo que elijan las asociaciones en la asamblea extraordinaria que se celebrará en enero y a la que han presentado su candidatura 27 asociaciones federadas. 5 de ellas - 3 más que en las elecciones anteriores- llegan de los municipios de Coslada, Móstoles, Morata de Tajuña y San Fernando de Henares, un dato que da cuenta de la apuesta por consolidar la dimensión regional de la Federación, que busca integrar más y mejor las asociaciones vecinales de los pueblos en sus órganos de dirección.

>> Los presupuestos aprobados por el Gobierno de Esperanza Aguirre para 2011 son, a juicio de la FRAVM, insolidarios, antisociales, antiecológicos y no ayudan a recuperar la economía y a crear empleo. Los recortes aplicados afectan, sobre todo, a las áreas esenciales para la articulación del Estado de bienestar (sanidad, educación, vivienda, servicios sociales...) y, por tanto, a las familias más desfavorecidas.

>> La Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público gracias a la cual el Ejecutivo de Esperanza Aguirre elimina 103 organismos regionales y la casi totalidad de los órganos de participación ciudadana de la Comunidad es una "ley mordaza" que sitúa a asociaciones, organizaciones no gubernamentales y sindicatos en una situación de retroceso democrático más propia de la época preconstitucional.

La ciudadanía defiende en la calle el Estado social

La reforma laboral que el pasado 29 de septiembre motivó la convocatoria, por parte de CCOO y UGT, de una huelga general responden, a juicio de la FRAVM, al dictado de los mismos intereses que han provocado la crisis. Los mismos por culpa de los cuales, administraciones públicas de diferente signo político han apostado por cargar a espaldas de la ciudadanía las consecuencias de los excesos de los mercados financieros. La nula voluntad de diálogo y concertación de la que han dado muestra todas ellas anuncian un año sembrado de movilizaciones.

Las políticas de recortes sociales y la supresión de derechos de los trabajadores decretados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero "bajo amparo y excusa de directrices europeas" alentó la convocatoria, por parte de CCOO y UGT, de una huelga general el pasado 29 de septiembre, la séptima desde el restablecimiento de la democracia en España. A juicio de las centrales sindicales era hora de promover un paro general para poner de manifiesto el rotundo rechazo de la ciudadanía a "los brutales ajustes económicos que se están adoptando como terapias de choque para salir de la crisis económica [que] son injustos socialmente, regresivos laboralmente y equivocados económicamente porque comprometen las posibilidades de crecimiento económico y de creación de empleo".

Más de 1.680 organizaciones de carácter social se sumaron a la convocatoria para exigir al Ejecutivo central la

La FRAVM pide el sobreseimiento de los cargos imputados a dos miembros de asociaciones vecinales detenidos el 29-S en el transcurso de la huelga.

retirada de una reforma laboral lesiva que facilita el despido y empeora las condiciones de trabajo; por la defensa de la negociación colectiva como marco de protección de las condiciones de trabajo; por el mantenimiento del sistema público de pensiones como eje central del sistema de protección social y el impulso de una política que reduzca el déficit público mediante el incremento de los ingresos y no mediante la reducción del gasto.

La junta directiva de la FRAVM acordó sumarse a la convocatoria con el objetivo de convertir el paro laboral en una movilización cívica amplia que pusiera de manifiesto el rechazo de la ciudadanía a las políticas antisociales promovidas, no sólo por el Gobierno central, sino también por el Ejecutivo autonómico y por gran parte de los ayuntamientos de la región que, con el pretexto de la crisis, han apostado por reducir las inversiones en los servicios públicos (atención a personas dependientes, rutas escolares...) y paralizar la construcción de nuevos equipamientos (centros de salud, bibliotecas, escuelas infantiles, instalaciones deportivas...) a pesar de los sucesivos incrementos de tarifas (transporte público, gas, electricidad...) e impuestos (IVA, IBI...).

Más de dos millones de personas salieron a la calle el 29-S. A pesar de ello, el Gobierno no movió un ápice su programa de recortes sociales. Es más, pocas semanas después anunciaba la retirada de la ayuda de los 426 euros a las 600.000 personas desempleadas que no perciben ningún tipo de prestación; impulsaba el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y ponía fecha a la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de la reforma del sistema público de pensiones a fin de iniciar su tramitación parlamentaria.

Carrera de fondo

Como ya se advirtiera en la asamblea monográfica celebrada en la sede de la FRAVM el 16 de septiembre, "la defensa de los derechos que ahora vemos amenazados es una carrera de fondo que no se acaba el día de la huelga general. Una carrera en la que nos vamos a tener que emplear a fondo ya que lo que ocurra ahora marcará los próximos 30-50 años".



Foto: S. Bienzobas

Ciclistas retenidos por la Policía Nacional en Atocha el 29-S.

>> El enésimo "tarifazo" aplicado al transporte público madrileño incrementará el próximo año en un 3,4% el precio del abono de 10 viajes, el más demandado por la población. A juicio de la Federación vecinal, esta subida desincentiva el uso del transporte público y vuelve a cargar a espaldas de la clase trabajadora los costes de la crisis económica.

>> La FRAVM recuerda que la **rehabilitación** debe formar parte de una política estratégica de recuperación del empleo y de lucha contra el cambio climático al mejorar la eficiencia energética y prolongar la vida útil de los edificios. Lamenta, por tanto, que las partidas de gasto en vivienda sufran severos recortes en los presupuestos de todos los niveles de la Administración, cayendo el de la Comunidad de Madrid un 43%.



FOTO: J. ROBLEDO

Cabecera de la manifestación celebrada el 18 de diciembre.

Un mes y medio después, los días 15 y 18 de diciembre, CCOO y UGT convocaron nuevas movilizaciones para, en palabras del secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, "exigir" al Estado y a los gobiernos "responsabilidad, esfuerzo colectivo, medidas negociadas y compartidas y diálogo social para salir de la crisis", algo que tanto el Gobierno como los empresarios "han roto". Para que los trabajadores tengan, en definitiva, "un horizonte de protección del Estado en unos momentos en los que la crisis está golpeando duramente a muchas familias".

La jornada del día 15 comenzó con una manifestación convocada por varias federaciones sectoriales, a la que le siguieron una concentración protagonizada por los trabajadores de los servicios privados frente a la sede de las patronales madrileña y española y otra que reunió a centenares de empleados públicos en la Puerta del Sol. Todos ellos sumaron un grupo de 5.000 personas que, por la tarde, se concentraron ante el Ministerio de Economía y Hacienda para transmitir "alto y claro" a la ministra que hay otra forma de defender el país que no sea "exclusivamente" la de "dar satisfacción al sistema financiero".

El sábado 18 de diciembre, centenares de miles de personas volvieron a

Toxo: "Con jubilación a los 67 generalizada y obligatoria no habrá acuerdo, sino huelga general. Y la habrá en enero".

inundar las calles de 39 capitales de provincia. En Madrid, miles de vecinos, muchos de ellos pensionistas y jubilados, pero también representantes de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid y trabajadores de CNN+, entre otros colectivos, exigieron la convocatoria de una nueva huelga general y clamaron una y otra vez "ZP, hazte del PP". En el escenario instalado en la Puerta del Sol, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, subrayó que las razones que motivaron la convocatoria de la huelga del 29-S "han crecido" como consecuencia de las medidas adoptadas por "un Gobierno de izquierdas" que, en lugar de buscar recursos "en la lucha contra la especulación, el fraude y la economía sumergida" a través, entre otras, del estable-

cimiento de un impuesto a las transacciones financieras y la prohibición de los movimientos especulativos de capitales, opta por eliminar los 426 euros de ayuda a las personas sin ingresos, congelar las pensiones, alargar el periodo de cotización para calcular la pensión y aprobar una reforma laboral manifiestamente lesiva para los trabajadores. En ese punto, Toxo defendió la Iniciativa Legislativa Popular como respuesta para "revertir" los peores efectos de una reforma contra la cual "tenemos que entregar centenares de miles de firmas coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas". Los sindicatos, aseguró, tienen la voluntad de defender "contra viento y marea" los intereses de la mayoría de la ciudadanía. Su último mensaje fue meridianamente claro: con jubilación a los 67 "generalizada y obligatoria" no habrá acuerdo sino "huelga general y la habrá en enero".

El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, por su parte, reconoció el deseo de las organizaciones sindicales de "combatir la crisis", pero no a cualquier precio, sino "fortaleciendo la democracia, la libertad, la igualdad, los derechos laborales y sociales". "Queremos -añadió- una política al servicio de la sociedad y no al servicio de unos mercaderes improductivos, especuladores, defraudadores de impuestos". Para ello, es necesario seguir movilizándolo a la ciudadanía porque "el conflicto sigue abierto, la lucha continúa" y, en definitiva, "sólo se pierden aquellas batallas que no libramos".



FOTO: S. BIENZOBAS

La plaza de Neptuno el día de la huelga general.

>> La Mesa del Agua (FRAVM, CCOO, UGT, CECU) exige al Gobierno regional que dé a conocer el contenido de los informes contratados a cuatro consultoras privadas para determinar la viabilidad económica, jurídica y social de la privatización del **Canal de Isabel II**, por los que el Ejecutivo de Aguirre ha pagado 1.114.235 euros de dinero público.

>> A medio plazo, miles de personas verán dificultado su acceso a la **sanidad pública** como consecuencia de los crecientes recursos destinados a la "externalización" de servicios. La aplicación del área sanitaria única y el debate abierto a nivel estatal sobre el copago auguran tiempos difíciles. La FRAVM analizará la situación en unas jornadas que se celebrarán en marzo-abril de 2011.

Varios distritos se suman a la campaña de presupuestos participativos

Un contenedor vacío de contenido. Así quedaron los Consejos Territoriales como consecuencia del recorte de competencias de las juntas y de una interpretación restrictiva y burocrática de su reglamento. A esta estocada a la participación ciudadana, el Ayuntamiento de la capital sumó la decisión de celebrar los plenos de distrito al mediodía. La reacción de las AAVV no se ha hecho esperar.

Desde el pasado 16 de septiembre, las dependencias municipales de Madrid, con excepción de las unidades de atención a usuarios, cierran sus puertas a las 5 de la tarde, "obligando" a celebrar los plenos de las juntas municipales al mediodía. Con esta medida, el Ayuntamiento espera ahorrar hasta 26 millones de euros, gran parte de los cuales procederán de la amortización de 755 plazas vacantes procedentes de diferentes unidades administrativas, con la excepción de los servicios sociales y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores gracias a una medida que el alcalde calificó como "pionera en la Administración española". "El equipo de Gobierno municipal -apunta Nacho Murgui, presidente de la FRAVM- ha puesto precio a la voz de las vecinas y vecinos interesados en participar en la gestión de los asuntos públicos de su distrito a través de unos plenos a los que, en adelante, no podrán asistir. El ahorro que supone abrir las 21 dependencias municipales once tardes al año es despreciable y apenas se va a notar. Los costes en participación, sin embargo, serán muy altos" en un momento en que "si es necesario hacer recortes, lo es también abrir cauces para que la ciudadanía pueda dar su opinión sobre cómo deben administrarse los recursos en base a las necesidades que las vecinas y vecinos consideren más urgentes".

Representantes de la FRAVM y de los grupos municipales del PSOE y de IU denunciaron las consecuencias de esta medida en un pleno ciudadano alternativo celebrado el pasado 11 de noviembre en la plaza de la Villa de la capital. Las 150 sillas desplegadas para acomodar a los asistentes previstos se quedaron cortas ante las más de 400 vecinas y vecinos que quisieron acudir para mostrar el descontento instalado en los barrios como consecuencia de los recortes sociales y del deterioro de algunos servicios básicos del Ayuntamiento.

Al final del acto, la federación vecinal hizo un llamamiento a la ciudadanía, "particularmente a los sectores organiza-

dos en el movimiento asociativo de cada distrito, a poner en marcha espacios participativos de deliberación, en torno a los presupuestos municipales. Espacios abiertos a los vecinos y vecinas para que puedan expresar sin cortapisas sus necesidades y propuestas, y darles curso a través de la movilización ciudadana".

De la plaza de la Villa a los barrios

Semanas atrás, la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de San Blas ya había dado el pistoletazo de salida a la constitución de estos espacios con la convocatoria de un pleno ciudadano al que acudieron cerca de 90 personas que pusieron de manifiesto su descontento ante la falta de competencias de unas juntas municipales que, a pesar de ser la administración más cercana a la ciudadanía y, conocer por ello la realidad de los distritos, carecen de competencias para dar respuesta a las necesidades detectadas. A continuación consensuaron las reivindicaciones más urgentes, entre ellas la mejora de los servicios de limpieza de las calles y el mantenimiento de los parques; la construcción de escuelas infantiles y de un instituto de enseñanza secundaria en el barrio de Las Rosas o la creación de accesos a la M-40. Todas ellas serán trasladadas a las áreas correspondientes del Ayuntamiento de Madrid a través de la FRAVM y de los grupos municipales del PSOE e IU.

Vallecas se sumó al proceso el 4 de noviembre, con una primera asamblea en la que se dieron cita 70 personas. Las entidades que participan en el Consejo Territorial del distrito dieron a conocer las 48 demandas consensuadas para su posterior traslado al Ayuntamiento. La construcción de un albergue juvenil, la ampliación de las escuelas deportivas municipales, la edificación de un centro de asociaciones... entre otras. En Barajas 45 vecinas y vecinos participaron en el pleno convocado por la casi totalidad de las asociaciones del distrito para elaborar un "catálogo" de necesidades que incluye la prioritaria remodelación del Barrio del Aeropuerto, la construcción de un centro de especialidades para el distrito, la creación de una línea de la EMT que comunique Barajas con el hospital Ramón y Cajal, la unión de las líneas 5 y 8 de metro y el destino del auditorio Juan Carlos I para usos culturales. Las asociaciones del distrito de Retiro, por su parte, han celebrado dos asambleas en las que han valorado los presupuestos del Ayuntamiento para 2011, un balance que utilizarán para elaborar propuestas de inversión en su próximo encuentro, previsto para el próximo 5 de febrero.

"Estas convocatorias -subraya Murgui-, constituyen los primeros pasos para la puesta en práctica de un modelo de participación ciudadana alternativo al actualmente vigente, que se ha demostrado obsoleto y manifiestamente ineficaz".



Pleno ciudadano alternativo celebrado en la plaza de la Villa el 11 de noviembre.

>> A petición de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), ésta y otras organizaciones sociales participarán en la comisión técnica de coordinación para la implantación de la **sociedad de la información** del Ayuntamiento de Madrid, dependiente del Área de Economía y Participación Ciudadana.

>> El pleno del Ayuntamiento de **Leganés** aprobó en noviembre una ordenanza reguladora que limita el nivel máximo de emisión electromagnética a 0,1 microvatios por cm² y contempla la implantación de un sistema por el que los ciudadanos podrán obtener información "a tiempo real" sobre la ubicación y potencia de las antenas de telefonía móvil instaladas.

Avances en la lucha contra la contaminación electromagnética

Sistemas Umts, redes WiFi, Wimax, Bluetooth, teléfonos Dect, consolas de juegos inalámbricas, teléfonos móviles, femtoceldas para viviendas y centros de trabajo... Los dispositivos emisores de radiaciones electromagnéticas se reproducen a velocidad de vértigo gracias a una poderosa industria que, en España, ha logrado que las sucesivas modificaciones legislativas se sometan cada vez más a sus intereses empresariales. La Comisión Europea ha iniciado, a instancias de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, una investigación para determinar el alcance de la gestión de un fenómeno ante el cual otros países han optado por proteger la salud de la población.

Favorecer la implantación de la "sociedad de la información" abriendo la veda a la instalación indiscriminada de dispositivos emisores de electropolución en calles, plazas, autobuses, viviendas, colegios, centros públicos... o mantener su implantación dentro de los límites que garantizan la salud de las personas. Esta es la disyuntiva a la que se enfrentan los gobiernos a la hora de regular las condiciones de protección del dominio radioeléctrico, y en la que España se ha posicionado de forma clara por la desregulación.

El real decreto que regula las cuestiones referidas a la ocupación del dominio radioeléctrico, las restricciones a las emisiones contaminantes y las medidas de protección data de 2001 (RD 1066/2001). No contempla, por tanto, el alcance de la implantación de nuevos sistemas como el Wi-Fi y Wimax e ignora, asimismo, las recomendaciones posteriores procedentes del Parlamento Europeo referidas a la necesidad de proteger a la población más vulnerable (niños, mayores, mujeres embarazadas...) ante la falta de estudios científicos que prueben de forma concluyente la inocuidad de la contaminación electromagnética.

Nueve países europeos, entre ellos Italia, Suiza, Bélgica, Polonia, así como China, Rusia, Nueva Zelanda y 16 ciudades francesas, han optado por hacer prevalecer el principio de precaución fijando límites de exposición inferiores a los recomendados por el Parlamento Europeo. No así España, que el pasado mes de marzo aprobó una orden que rebaja los requisitos a cumplir por los operadores de telefonía para instalar determinadas estaciones radioeléctricas e ignora aspectos sanitarios que sí contemplaban normativas anteriores. La deriva de la gestión del Gobierno español es, por tanto, menos garantista. De hecho, el ministerio que dirige Miguel Sebastián aprobó esta orden de forma unilateral, sin contar con la participación del Ministerio de

Sanidad, como establece el RD 1066/2001. Previamente había obtenido el plácet de un Consejo Asesor de las Telecomunicaciones que ha negado la voz a la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) y a otras organizaciones sociales. Para Francisco Caño, responsable de la comisión de Antenas de Telefonía de la FRAVM, resulta "verdaderamente sintomático que quien gestione estas cuestiones sea el Ministerio de Industria, sin la necesaria participación de los ministerios de Medio Ambiente y Sanidad".

La Comisión Europea mira a España

Todo ello animó a las organizaciones que hace apenas un año constituyeron la PECCEM a solicitar al Parlamento Europeo que haga un llamamiento al Estado español a fin de que revoque todas las leyes y normativas tendentes a una mayor liberalización y descontrol de la instalación de dispositivos emisores de microondas y disponga, hasta que estén más claros los posibles riesgos, un estricto control adecuando a tal efecto las normativas estatal, autonómica y municipal. La respuesta llegó el 9 de diciembre firmada por la presidenta de la comisión de peticiones, Erminia Mazzoni, que infor-

mó de la solicitud remitida a la Comisión Europea para que inicie una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema planteado.

Con el Ejecutivo estatal, las cosas van un poco más lentas. Portavoces de la Plataforma se dieron cita con responsables de los grupos parlamentarios del BNG, NaBai y ERC-IU-ICV en el Congreso de los Diputados para transmitirles la creciente preocupación ciudadana por los posibles riesgos para la salud derivados de la creciente exposición de la población a los campos electromagnéticos. Dos semanas más tarde fue el grupo parlamentario socialista el que recibió a una representación de la Plataforma que, entre otras medidas, demandó una modificación de la legislación para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones europeas y la sustitución del WiFi por cable en el programa Escuela 2.0, siguiendo el ejemplo de Francia y de Alemania. "Las distintas instancias del Gobierno a las que, acompañados por científicos como Ceferino Maestu, nos hemos dirigido confiesan no estar suficientemente informados para valorar nuestras propuestas -apunta Caño-, pero han mostrado interés, por lo que somos optimistas. Más ahora, que la Comisión Europea investigará las cuestiones que hemos denunciado".



Antenas de telefonía en el madrileño barrio de Fuente del Berro.

>> El pasado 28 de octubre, la Federación Local de AAVV de Leganés registró 13.356 firmas en la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para exigir la correcta y puntual aplicación de la **Ley de Dependencia** en la Comunidad de Madrid y demandar la construcción de residencias públicas y cuatro centros de día en el municipio.

>> El **Observatorio Social**, integrado por la FRAVM, CCOO, UGT y CECU-Madrid, ha solicitado la celebración de un pleno monográfico sobre la Ley de Dependencia en la Asamblea regional. El 37% de las personas que tienen derecho a percibir prestaciones derivadas de la aplicación de esta norma en nuestra Comunidad -cerca de 25.000- no reciben en la actualidad las ayudas que les corresponden.

Nace la comisión de Mayores de la FRAVM

“Las pensiones son el fruto de una vida entera de trabajo, no una concesión del gobierno de turno”

El pasado 12 de mayo, el Gobierno de Rodríguez Zapatero anunció un recorte histórico del gasto social en respuesta al dictado de la Unión Europea de reducir el déficit público por debajo del 3% antes de 2013. Los salarios del sector público cayeron un 5%. En 2011 y, por primera vez desde la firma del Pacto de Toledo, las pensiones se congelarán. Más de cinco millones de personas, muchas de ellas dependientes de unos ingresos inferiores a los 800 euros mensuales, perderán así capacidad adquisitiva el año que viene. El Ejecutivo suma a ello la posibilidad de elevar la edad de jubilación de los 65 a 67 años. Estas medidas, sumadas al sistemático incumplimiento, por parte de la Comunidad de Madrid de la Ley de Dependencia impulsó la constitución, en julio, de una comisión de Mayores. Hablamos con Vicente Luis Llopiz, de la AV Mayores Ecologistas (Ciudad Lineal) y coordinador de este nuevo espacio de la FRAVM.

Gaceta Vecinal: Según el Gobierno, el Estado no puede afrontar el déficit venidero de nuestro sistema de pensiones sin elevar la edad legal de jubilación...

Vicente Luis Llopiz: Sectores interesados y ligados fundamentalmente a entidades financieras vienen divulgando la idea de que nuestro sistema público no puede afrontar el pago de las pensiones. Eso es radicalmente falso. Desde hace 13 años y, de manera sostenida, presenta superávit en sus cuentas. Este año, sin ir más lejos, cerrará el ejercicio con un excedente de 4.000 millones de euros. Además, el Fondo de Reserva cuenta con más de 62.000 millones de euros. Nuestro sistema público de pensiones, basado en el reparto y la solidaridad, no tiene, por tanto, ningún problema de sostenibilidad ni a medio ni a largo plazo.

G.V.: El Gobierno pide sumar esfuerzos para recuperar la economía...

V.L.LL.: Nos acaban de subir el IVA, el butano, la luz lo ha hecho en dos ocasiones en este año, la inflación ha superado el 2% y el número personas sin trabajo no deja de aumentar, mientras las entidades financieras, las multinacionales y las grandes empresas siguen obteniendo beneficios récord. Son las entidades financieras, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional los que cuestionan, de manera interesada, el futuro de nuestras pensiones y el Gobierno el que se convierte en cómplice de sus intereses.

G.V.: El Ejecutivo ya ha advertido que aprobará la reforma del sistema de pensiones en enero y no parece que esté muy abierto al diálogo...

V.L.LL.: La última palabra no está dicha. Si nos esforzamos podemos conseguir que una movilización sostenida obligue al Gobierno a rectificar. Por eso, es importante concienciar a todos los pensionistas en la idea de que el derecho a cobrar nuestra



VLL. Llopiz, responsable de la comisión de Mayores de la FRAVM.

pensión es consecuencia de una vida de trabajo, para nada una concesión del gobierno de turno. Debemos apoyar a los parlamentarios de los grupos que, aunque minoritarios, defienden los intereses de los trabajadores con sus enmiendas para que el desarrollo de los acontecimientos nos depare un futuro que responda a lo que, durante años, hemos aportado.

G.V.: Otro de los caballos de batalla de la comisión es la no aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid

V.L.LL.: Efectivamente, en nuestra Comunidad, las personas a las que se les ha reconocido el derecho a percibir los servicios y ayudas derivadas de la aplicación de esta ley esperan, de media, un año y medio para cobrar unas prestaciones que, dada la coyuntura económica y las difíciles circunstancias familiares que acompañan la vida de estas personas, resultan fundamentales. Es inadmisibles que el Gobierno de Aguirre utilice como arma arrojadiza a los más débiles en su particular cruzada política contra el Gobierno de Zapatero. La FRAVM y el resto de organizaciones que forman parte del Observatorio Social se han reunido con los grupos municipales y parlamentarios del PSOE e IU y con el Defensor del Pueblo para denunciar una situación, a todas luces insostenible.

La comisión se reúne los primeros viernes de mes en la sede de la FRAVM.

>> La FRAVM y CEAV rechazan la previsión de incremento, en un 9,9%, de la **factura de la luz** que se aplicará en enero de 2011 y lamentan que el Ministerio de Industria se pliegue a los intereses de las grandes corporaciones del sector energético a costa de lesionar los derechos de los usuarios, que en apenas tres años y medio pagan un 34,8% más por un servicio básico y universal.

>> Las asociaciones de la FRAVM están sembrando de **huertos urbanos comunitarios** la ciudad de Madrid. Cinco funcionan a pleno rendimiento y otras cinco entidades trabajan hoy para materializarlos. La Casa Encendida y la Universidad Complutense de Madrid se han hecho eco de estas experiencias en jornadas monográficas.

La suciedad gana terreno un año después de la implantación de la tasa de la basura



Foto: S. O. GONZÁLEZ

La recogida de la hoja, suspendida por los recortes aplicados por el Ayuntamiento.

Miles de personas se concentraron el 15 de noviembre de 2009 en la Puerta del Sol contra la tasa de la basura impuesta por el Ayuntamiento de Madrid, que había decidido dejar de prestar "gratis" el servicio de recogida de residuos.

Apenas un año después, las vecinas y vecinos de Madrid caminan por calles alfombradas de hojas, muebles "aparcados" indebidamente en la vía pública y contenedores de reciclaje y papeleras desbordados de basura como consecuencia del recorte, en un 15%, de los costes de los contratos de prestación de servicios que el equipo de Gallardón aplicó el pasado mes de mayo para rebajar la deuda municipal.

El tijeretazo acabó, entre otros, con la campaña especial de limpieza en Navidades, el servicio de recogida de la hoja, la retirada nocturna de muebles y enseres y disminuyó la frecuencia del vaciado de los contenedores amarillos. 300 trabajadores eventuales responsables del cuidado de los jardines y zonas verdes perdieron su empleo y 2.000 se quedaron sin sus contratos de sustitución de las bajas producidas durante las vacaciones estivales. A ellos se suman las más de 600 personas que años atrás se habían encargado de la recogida de la hoja y del servicio especial de limpieza de Navidad. En total, el recorte aplicado por Gallardón ha dejado en el paro a cerca de 3.000 personas, sobrecargando de trabajo al resto de trabajadores del servicio.

La situación, sin embargo, puede empeorar ya que el Ayuntamiento acumula una deuda millonaria con Aselip, la patronal de empresas de limpieza viaria, recogida de basuras y jardinería integrada por las compañías FCC, Urbaser (ACS), Cespa (Ferroviario) y Sufi (Sacyr). "Facturamos 450 millones de euros al año, pero el alcalde nos debe 412" aseguró el presidente de la asociación de empresas al diario *Expansión* el pasado 22 de noviembre. Unas semanas antes, el Consistorio madrileño había abonado las certificaciones correspondientes a noviembre y diciembre de 2009, pero ya entonces advirtió, en palabras de Jardón "que no pagaría nada más hasta enero y que en dicho mes nos abonaría lo que nos debe de enero de 2010". El saneamiento y la recogida de basuras en 2011, por tanto peligran, "no como una amenaza -aclara-, sino porque no podemos".

"Nos encontramos -denuncia Francisco Caño, responsable de Medio Ambiente de la FRAVM- en una situación sin precedentes. Las tasas deben tener un carácter estrictamente finalista, de manera que lo recaudado se debe destinar exclusivamente a financiar el coste del servicio gravado. ¿En qué ha invertido el Ayuntamiento el dinero de la tasa de la basura si debe más de 400 millones de euros a estas empresas?", se pregunta. "Ya en su momento advertimos que la implantación de la tasa era una medida meramente recaudatoria. El tiempo -concluye- parece darnos la razón".

La FRAVM mantiene un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hace unas semanas requirió al Ayuntamiento el informe económico que, en virtud de la Ley de Haciendas Locales, debía haber presentado para justificar el establecimiento de la tasa. La Federación vecinal aprovechó también la modificación de la Ordenanza reguladora de las tasas por servicios y actividades relacionados con el medio ambiente para pedir, una vez más, su inmediata retirada. "Confiamos -subraya Caño- en que los tribunales nos den la razón y el Ayuntamiento retire una tasa que ha concitado la oposición del conjunto de la ciudadanía por no ser ni progresiva ni ecológica y, ahora además, por haber sido objeto de una gestión poco transparente y en absoluto eficaz".

BARRIOS INTEGRADORES

Conocer los derechos para ejercerlos y ejercerlos para que se cumplan. Ese es el objetivo con el que la FRAVM ha editado la *Guía básica de derechos para todos y todas*. Los cinco cuadernillos que componen la publicación contienen la información necesaria para que las vecinas y vecinos ejerzan los derechos de acceso a la educación, la sanidad, la vivienda, la participación ciudadana y la libre circulación, incorporando a este respecto las novedades derivadas de la última modificación de la Ley de Extranjería.

La guía, financiada por la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, facilitará la labor de las asociaciones vecinales en su afán por promover procesos de integración de la población migrante en sus barrios y municipios y por alimentar una convivencia pacífica, una labor más necesaria que nunca para hacer frente a la extendida tentación de convertir la inmigración en chivo expiatorio de la crisis.



>> En el barrio de **Butarque (Villaverde)**, el alumnado del colegio "fantasma" Ausias March acude a las aulas disponibles de una escuela cercana, El Greco. Las movilizaciones promovidas por la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque para exigir la edificación del primer centro han dado por fin sus frutos de manera que, de cumplirse los plazos establecidos por el Gobierno regional, el alumnado del Ausias March contará con un edificio propio el próximo curso.

>> El 28 de noviembre, unas 400 personas participaron en el IX Cross del Pinar de **La Elipa**, un evento que la asociación vecinal del barrio organiza anualmente con objeto de poner en valor y defender una zona verde tantas veces amenazada. La entidad aprovechó el evento para organizar una limpieza ciudadana del paraje natural, cuya conservación se ha degradado en los últimos tiempos como consecuencia de la reducción de la inversión municipal.

El Museo al Aire Libre de Palomeras Bajas, en peligro

Hace 23 años, el alcalde Enrique Tierno Galván inauguró uno de los espacios más singulares de la capital, el Museo al Aire Libre de Palomeras Bajas. A pesar del mantenimiento realizado por el vecindario de este popular barrio de Vallecas todo este tiempo, el conjunto escultórico corre el riesgo de desaparecer bajo la maleza y la basura ante la falta de recursos públicos. La asociación vecinal del ámbito reclama al Consistorio que tome cartas en el asunto.

Aunque muy pocos los conocen, Madrid cuenta con dos museos en abierto. Uno, el Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana, se encuentra bajo el puente de Juan Bravo, en el distrito Salamanca. El otro, aún más desconocido, forma parte de uno de los barrios más populares de la capital, Palomeras Bajas, en Puente de Vallecas. Y, aunque ambos están incluidos en el Catálogo de Elementos Ornamentales del Consistorio madrileño, y por tanto su mantenimiento es responsabilidad de éste, el primero, anclado en una de las principales zonas comerciales y financieras de la capital, goza de una excelente salud mientras el segundo presenta claros signos de abandono. Por ello, la asociación vecinal de Palomeras Bajas, con el apoyo de la FRAVM, ha comenzado a moverse para que el Ayuntamiento garantice la preservación de un conjunto que supone un auténtico orgullo y seña de identidad del barrio. En este marco, ha organizado visitas guiadas al museo abierto, algunas de cuyas obras se encuentran cubiertas de maleza o han sido deterioradas como consecuencia de actos vandálicos. Tal y como sostiene Almudena Jiménez, portavoz de la entidad ciudadana, después de 23 años, y "a pesar de que había quien le auguraba una corta vida, las esculturas siguen aquí, gracias a que los vecinos las hemos preservado. Sin embargo, a pesar de que constituye un ejemplo singular y único de museo al aire libre en un barrio popular, la falta de mantenimiento y de los cuidados especializados que requiere este patrimonio artístico y cultural amenaza su conservación", asegura la dirigente vecinal.

La historia de este circuito de esculturas está ligada a la del llamado Poblado Mínimo de Vallecas, un conjunto de bloques que formó parte del proceso de remodelación de barrios periféricos consecuencia de la Orden Comunicada de mayo de 1979 del Ministerio de Obras Públicas. Gracias a esta intervención urbanística, 150.000 personas fueron realojadas en 40.000 nuevas viviendas, que reemplazaron, en el mismo lugar donde las habían construido de forma irregular, a las chabolas que servían de residencia. El equipo de arquitectos encargado de ejecutar el plan en el poblado vallecano, formado por Mariano Calle, José Manuel Pazos, Jaime de Alvear y Álvaro de la Peña, no se contentó con diseñar un conjunto funcional de pisos y propuso un espacio atravesado por pasillos ajardinados con diferentes esculturas. Para ello, se recurrió al Real Decreto 2838/1978, de 27 de octubre, que permitía destinar el 1% del presupuesto de cualquier obra pública



"La fuga", escultura de Juan Bordes.

financiada por el Estado a trabajos artísticos. Finalmente, el IVIMA aprobó el singular proyecto y, en una primera fase, propuso a los escultores Javier Aleixandre y Jesús Valverde la realización de dos obras en los soportales del bloque de viviendas.

"Los procesos de remodelación han de ser también un esfuerzo cultural. Hay que embellecer la ciudad no sólo con arquitectura, sino también con esculturas. Hay que hacer no sólo viviendas dignas, sino también ciudades dignas". Estas palabras, que fueron pronunciadas en 1987 por Enrique Tierno Galván en el marco de la inauguración de esta fase inicial, dan muestra del espíritu que rodeó la remodelación de esta modesta zona de la capital. En su segunda fase, el proyecto se amplía con la implantación de nuevos motivos artísticos en los espacios libres de nueva creación, lo que implicó reelaborar la parte reservada a jardines. Para ello, se contrató a la paisajista Sylvia Decorde y se incorporaron, con nuevas obras, los escultores Juan Bordes y Joaquín Rubio Camín, el ceramista Arcadio Blanco y los pintores Ceferino Moreno y José Luis Pascual. La implicación de todos ellos en la creación del nuevo barrio resultó esencial. Entre todos, con la participación del vecindario y junto a los arquitectos, se crea un conjunto singular, que pivota en torno a una plaza-jardín de la que salen senderos peatonales que conectan con los portales de viviendas. En estas sendas, se crearon muretes artificiales, conformando laderas de umbría y solana en las que alternan los relieves de cerámica con diferentes plantas y arbustos. Junto a ellas, aparecen esculturas como el "Monumento a un Personaje Importante", una figura ecuestre que fue realizada en base a las propuestas de los alumnos de los colegios de la zona, "La Maternidad" o "La fuga", que representa a una mujer que huye de un perro que aulla. El suelo de la principal zona interbloques aparece decorado con símbolos que representan una "alegoría del orden cósmico" y mosaicos con motivos marinos decoran la planta baja de uno de los edificios.

La FRAVM y la asociación vecinal del ámbito esperan que el Consistorio rehabilite y mantenga adecuadamente un espacio que, más allá de la belleza de sus elementos artísticos, aparece como un ejemplo de remodelación urbanística, donde se mezclan con maestría arquitectura, paisajismo, escultura y pintura.

>> El 11 de diciembre, un mes después de haber sido levantado e inaugurado por un grupo de vecinos en los terrenos del antiguo penal, el nuevo "hospital público de Carabanchel" puso en "funcionamiento" sus primeras especialidades. Siguiendo un llamamiento de la **Coordinadora Vecinal de Latina y Carabanchel**, más de un centenar de personas, simulando ser profesionales sanitarios y pacientes, participaron en un acto que buscaba llamar la atención sobre el enorme déficit sanitario que padece el distrito.

>> Ante el estado de abandono que presenta buena parte del barrio, cansados de aguantar una situación que viene de lejos, los vecinos y vecinas de **Lucero** (Latina) se han armado de pintura y adhesivos amarillos para marcar los "puntos negros" de sus calles. La iniciativa, impulsada por la asociación vecinal de esta zona, comenzó a finales de noviembre y se prolongará "hasta realizar un mapa completo de todo el barrio", indica Javier Poveda, presidente de la entidad.

La pestilencia de **Valdemingómez** llega a la **fiscalía**

Las asociaciones vecinales de Butarque (Villaverde) y Ensanche-PAU de Vallecas, impulsadas por las reiteradas quejas de los ciudadanos de sus barrios, han elevado a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid el problema de los malos olores procedentes del parque de recogida de residuos de Valdemingómez. El Defensor del Pueblo, por su parte, ha sugerido al Ayuntamiento un estudio olfatométrico.

A pesar de que aún quedan varios meses para los comicios municipales, algunos políticos de la capital ya se han enfundado el traje preelectoral y reparten promesas como si de golosinas se tratara. Así, el concejal-presidente del distrito de Villa de Vallecas, Ángel Garrido, aseguró el pasado 20 de noviembre que si el PP gana las elecciones sellará definitivamente la planta de compostaje de Las Lomas, en Valdemingómez, origen de la mayor parte de los malos olores que a diario sufren las poblaciones próximas a la infraestructura, sobretodo Rivas-Vaciamadrid, el PAU de Vallecas y el barrio de Butarque, en Villaverde. Aunque desconfían de las palabras del político popular, las asociaciones vecinales de estas dos últimas zonas saben que detrás de la promesa se encuentra una presión ciudadana que viene de largo. Tras diversas acciones de protesta en la calle, la última de las cuales tuvo lugar en el barrio el 24 de octubre en forma de suelta de cometas "por un aire limpio", la asociación vecinal PAU-Ensanche de Vallecas elevó el caso a principios de ese mes a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. En su escrito, el colectivo ciudadano no sólo se queja de la pestilencia que soporta la zona desde hace años, sino de la aparición de alarmantes nubes negras que, procedentes de Valdemingómez, generan "un fuerte olor a cenizas y polvo que se cuela en las casas". Para la entidad, el Ayuntamiento no sólo está incurriendo en "dejadez y falta de control" de sus instalaciones, sino que puede incumplir varias normas de la legislación medioambiental e incluso el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En la UE diferentes administraciones locales han sido condenadas como responsables de molestias al vecindario provocadas por instalaciones similares.

Siguiendo el ejemplo de las gentes del ensanche valleciano, la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (AVIB) presentó semanas después otra queja sobre los malos olores de Valdemingómez en la misma fiscalía con objeto de que abra una investigación sobre su origen y res-

ponsables. "Con demasiada frecuencia –explican los portavoces de la entidad–, el barrio de Butarque se impregna de un mal olor muy fuerte" que "se intensifica por la noche" y "es mucho más fuerte en los meses de verano, lo que complica más la vida a los vecinos que, en muchas ocasiones, no pueden abrir las ventanas de sus casas en los días de fuerte calor". La pestilencia que llega de la citada estación de compostaje se une a la que provocan las depuradoras de La China, La Gavia y Butarque, denuncia el vecindario de este barrio de Villaverde. "No es casualidad –advierten– que estos problemas se sufran en las mismas zonas de la ciudad", ya que, a su juicio, el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid acumulan la mayoría de las instalaciones "incómodas" en la zona sur.

Las molestias que causan los vapores de Valdemingómez, que los vecinos de Butarque y el PAU de Vallecas han catalogado y hecho público a través de los sitios web de sus asociaciones son tan evidentes que el Defensor del Pueblo ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid un estudio olfatométrico de conformidad con la normativa sobre calidad del aire de la UE que abarque un radio de cinco kilómetros alrededor

del parque tecnológico. Avalando la posición del movimiento ciudadano, la institución entiende que el problema de los olores radica en una falta de planificación urbanística que ha permitido que esta infraestructura se haya construido en una zona demasiado próxima a zonas residenciales como el ensanche de Vallecas o Valdelázar y la colonia Pablo Iglesias, en Rivas-Vaciamadrid, por lo que pide a la Administración local que, sin más demora, tome cartas en el asunto. Asimismo, el Defensor ha pedido al Consistorio madrileño que para evitar este tipo de situaciones en un futuro, cumpla con su deber de coordinarse adecuadamente con el resto de administraciones afectadas, especialmente con los ayuntamientos de los municipios vecinos.

Antes del concejal de Villa de Vallecas, la delegada de Medio Ambiente de Madrid, Ana Botella, anunció que el Consistorio está estudiando la manera de aislar Las Lomas, la única zona de compostaje que sigue al aire libre y genera los malos olores. Los vecinos no dan demasiado crédito a sus palabras, menos aún en periodo preelectoral, por lo que han prometido continuar su presión hasta que el problema se solucione por completo.



Foto: O. CAIJO.

El complejo de Valdemingómez, fuente de los malos olores.

>> La **AV de Ópera-Austrias** (Centro), cuya actividad se ha reactivado en los últimos meses gracias al ingreso de un buen número de nuevos socios, demanda un plan de movilidad para la zona ante los continuos problemas que causan los coches y autobuses de turistas. A la invasión diaria de estos vehículos se ha sumado desde hace unos meses el molesto tránsito de cochecitos de alquiler de la empresa Go-Car en vías peatonales como la calle Santiago.

>> Poco después de que la **AV de Las Rosas** (San Blas) denunciase, a finales de septiembre, que la nueva base del SAMUR en San Blas llevaba un año cerrada y a la espera de iniciar su actividad, fue por fin inaugurada, para alegría del vecindario. El local, un edificio modular de 350 metros cuadrados de superficie situado en la calle Liverpool, se construyó en 2009 con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local en respuesta a una conocida reivindicación vecinal.

La subasta de promociones de la EMVS, “un torpedo en la línea de flotación de la VPO”

Las exiguas arcas del Ayuntamiento de Madrid han llevado a sus gestores a vender a la empresa privada cuatro promociones de viviendas en régimen de alquiler de la EMVS. La medida, sin precedentes en España, abre la veda para que las administraciones, con el argumento de la recesión económica que ahoga sus finanzas, descapitalicen su parque de viviendas sociales. Las 630 familias afectadas por la operación, tras protagonizar una intensa movilización, han conseguido que la promotora adjudicataria se comprometa a mantener los alquileres protegidos hasta 2020.

El pasado 13 de septiembre, el ayuntamiento más endeudado de España se convertía también en el primero en realizar una operación de venta de una parte de su parque público de viviendas a una promotora privada. Ese día, en contra de la opinión de las 630 familias afectadas y de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que las ha apoyado desde que tuvo constancia de las intenciones del Consistorio, subastó cuatro promociones de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) situadas en Sanchinarro, Carabanchel, Vallecas y Moratalaz.

Finalmente, los pisos fueron a parar a la única empresa que se presentó al concurso, Lazora, que aportó 65 millones de euros por la adquisición y, por ahora, se ha comprometido con los inquilinos afectados a mantener los alquileres al mismo precio que tenían pactado con la EMVS el tiempo que dispongan los contratos. Aunque los afectados todavía no lo han visto en papel, la promotora, que está especializada en explotación de alquileres, ha asegurado que no tiene interés en vender viviendas y que renovará los contratos de alquiler cuando estos concluyan.

Por el momento, estas intenciones han calmado a las familias, que desde que el pasado 31 de julio el Ayuntamiento anunció sus propósitos, no han cesado de movilizarse para reclamar la permanencia en sus casas con las mismas condiciones en las que entraron. En poco más de un mes y en pleno verano, organizaron siete protestas en la calle, la última de las cuales, celebrada el 5 de septiembre, reunió en una manifestación a más de 3.000 personas. Tras la subasta y ante las promesas de la promotora, el movimiento ha ido perdiendo fuelle, lo que no quita para que de él naciese una nueva entidad que hoy está federada en la FRAVM, la Asociación de Vecinos Afectados por la EMVS (AVASEMVS), que sigue reclamando el derecho de los inquilinos de estas promociones a adquirir sus viviendas.



El 5 de septiembre, unas 3.000 personas se manifestaron por el centro de Madrid contra la subasta del Ayuntamiento.

Tal y como relata la nueva entidad, las familias, en virtud del “plan de primera vivienda” de la EMVS, “firmaron un contrato de alquiler, con un plazo de duración de diez años, donde se reflejaba una opción a compra, que regulaba las condiciones y requisitos en los que debía realizarse dicha opción a compra”. “En el contrato -continúan- esta opción aparecía reflejada de una manera ambigua en su cláusula tercera, y decía que “la EMV facultativamente podrá vender...”. “Una cláusula que no entendía nadie, pero los propios funcionarios nos confirmaban de palabra: decían que eran precauciones jurídicas de los abogados para cubrirse las espaldas, y no se podía modificar, que lo único que teníamos que

hacer era firmar, y esperar, porque la política de la EMVS es que siempre se lo ofrecen [las casas] en venta a los inquilinos antes de los diez años", indican los afectados. Muchos de los hogares, de limitados recursos económicos, optaron a la vivienda con el objeto de adquirirla posteriormente a precio protegido, por lo hoy se sienten completamente "estafados" por el Ayuntamiento. "Nos han engañado, a 630 familias, con una clausula abusiva de imposición unilateral, innegociable, que los únicos que entendían eran ellos, y que han utilizado como medida política, para hacer publicidad en los medios de la entrega de vivienda pública a jóvenes con opción a compra", sostienen con amargura.

¿Por qué el Ayuntamiento no ha querido vender las viviendas a sus actuales moradores si éstos estaban dispuestos a abonar un monto similar al ofrecido por Lazora? La respuesta, según los afectados, hay que buscarla en la necesidad del Ayuntamiento de obtener ingresos de manera inmediata.

Aunque la FRAVM es consciente de que la operación municipal se halla dentro de los márgenes de la legalidad, según su responsable de Vivienda y Urbanismo, Vicente Pérez Quintana, supone "un torpedo en la línea de flotación de la vivienda social". Además, el problema "podría hacerse extensible a miles de familias si la EMVS decide con-

tinuar con esta política de descapitalización del parque de vivienda social". Las declaraciones del alcalde alegando que la subasta era un ejercicio de solidaridad para construir más viviendas sociales son, para Pérez Quintana, "un insulto a la inteligencia cuando lo que están haciendo es vender a 100.000 euros pisos que las empresas privadas pueden vender luego a 300.000 euros, lo que supone un regalo a estas empresas". El Ayuntamiento "está intentando hacer caja a costa de los ciudadanos, intentando que, entre todos, paguemos las consecuencias de la faraónica política que Gallardón ha llevado a cabo durante los últimos años", concluye.

Lavapiés: crónica de una década de exitosa (e inconclusa) rehabilitación

El 27 de octubre, el futuro Museo de Artes y Tradiciones Populares de Madrid, ubicado en una antigua corrala, fue el escenario elegido para presentar una concienzuda y nada complaciente investigación sobre la rehabilitación de uno de los barrios con más solera de la capital: Lavapiés. Ese día, su autor, el sociólogo y responsable de Urbanismo de la FRAVM, Vicente Pérez Quintana, además de repasar los éxitos de este proceso participativo, recordó la gran tarea pendiente: acabar con las 8.000 infraviviendas que aún tiene el barrio.

Las cifras de la rehabilitación de Lavapiés hablan por sí solas. En diez años, gracias a la acción concertada del Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno regional y el Ministerio de Fomento, se han rehabilitado 8.659 viviendas y 947 locales comerciales. Las tres administraciones, con la supervisión y la participación del tejido asociativo de la zona, han destinado en el periodo 1998-2011 un total de 88,5 millones de euros, de los cuales 60,4 millones de euros se han invertido en mejorar la calidad de las viviendas y 28,1 millones de euros a renovar sus infraestructuras. Además, el Consistorio de Gallardón ha gastado en estos años 40 millones de euros en recuperar algunas de las corralas más representativas del barrio, como la que se encuentra en la calle Carlos Arniches y que en breve abrirá sus puertas como Museo de Artes y Tradiciones Populares. Precisamente este espacio, que aparece como un ejemplo de buenas prácticas en rehabilitación, acogió la presentación de un libro único -e imprescindible- para entender el proceso urbanístico que ha vivido el barrio en la última década: *Lavapiés. Intervención y rehabilitación 1998-2008*, del sociólogo y dirigente vecinal Vicente Pérez Quintana.



>> El vecindario del PAU de **Las Tablas** (Fuencarral) continúa su movilización para exigir al Ayuntamiento de Madrid que cumpla su compromiso de construir varios equipamientos públicos de primera necesidad como un polideportivo, una biblioteca y un mercado. Tal y como le recordó la asociación vecinal del ámbito en una concentración que tuvo lugar a final de septiembre, a sus habitantes no les sirve "la coartada de la crisis" para justificar el incumplimiento de un acuerdo que el Consistorio asumió en 2008.

>> El pasado 23 de noviembre, a iniciativa de la **AV de Majadahonda**, varias decenas de personas se concentraron en la localidad para denunciar el "sangrante" incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles que el Consistorio ha aplicado desde 2007, que supone un 8%. La entidad, que se creó hace dos años para aglutinar la protesta por este motivo, reclama un IBI socialmente justo que, con los valores de 2009, contemple bonificaciones fiscales para las familias más desfavorecidas.

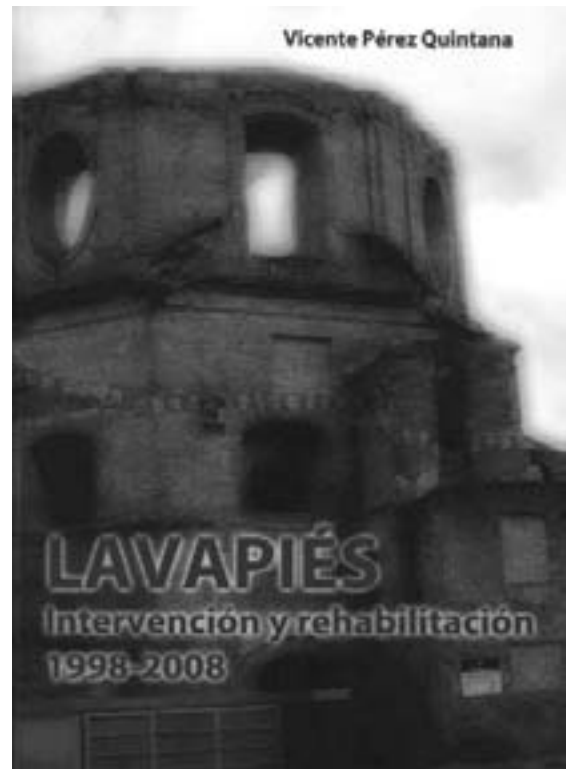


Presentación del libro *Lavapiés. Intervención y rehabilitación 1998-2008*. De izqda. a dcha., Pilar Martínez, delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, Ángeles Marín, directora general de Arquitectura y Vivienda de Fomento, Nacho Murgui, presidente de la FRAVM y el autor del estudio, Vicente Pérez-Quintana.

El resultado de estas dos fases del Área de Rehabilitación Integral (ARI) de Lavapiés salta a la vista: no sólo por la mejora de su caserío sino por el desarrollo de sus zonas verdes, plazas públicas, viarios y aparcamientos. Sus vecinos, con la asociación La Corrala, auténtico motor del lugar y del proceso de rehabilitación, a la cabeza, así lo reconocen. Pero aún queda mucho por hacer para convertirse en un "barrio de primera". "El barrio ha mejorado mucho en los diez últimos años, pero el ARI empezó con unas 8.000 infraviviendas y a día de hoy seguimos prácticamente con las mismas", recordó Pérez Quintana a las responsables del Ayuntamiento y del Gobierno central que compartieron la mesa de ponentes en la presentación de su investigación. En ese periodo, tan sólo se han eliminado 300 de estos hogares precarios, por lo que la FRAVM, de cara al próximo Plan General de Ordenación Urbana de la capital, "pedirá que se incluya como una prioridad la erradicación de la infravivienda del Centro y en concreto de Lavapiés", anunció el responsable vecinal, antes de solicitar la reedición del área de rehabilitación. "Aunque para Lavapiés hace falta algo más que un ARI, hace falta una Área de Rehabilitación Concertada, pero la Comunidad no quiere ni oír hablar del tema", remachó.

En el acto, tanto la delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, como Ángeles Marín, directora general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento, ante el éxito de la intervención concertada, se comprometieron a impulsar una tercera fase del ARI de Lavapiés. Ahora la pelota se encuentra en el tejado de la Comunidad de Madrid, sin cuyo beneplácito no se puede ampliar un proceso que ha supuesto todo un ejemplo de cooperación entre administraciones y de participación ciudadana, tal y como subrayaron no sólo aquéllas sino también los presidentes de la FRAVM, Nacho Murgui, y de la AV La Corrala, Manuel Osuna, que compartieron mesa. Todos ellos alabaron las 324 páginas que componen el trabajo de Pérez Quintana - "una herramienta que sirve para transformar la realidad, muy útil no sólo para las administraciones sino también para las asociaciones vecinales", en palabras de Murgui- y tuvieron un recuerdo especial para una de las principales

impulsoras y expertas de la rehabilitación de Lavapiés, María Rocés, de la FRAVM, ausente ese día por problemas familiares. "Llevo 20 años luchando codo con codo con ella, una persona que hemos visto oponerse a los desalojos de viviendas del barrio, a los que acudía a veces con 30 señoras, a veces con 5, pero siempre en primera línea", indicó el autor de la publicación. En su intervención, Pérez Quintana apuntó las características de su modelo de intervención, que va mucho más allá de la mejora estructural de las viviendas. "Cuando hablamos de rehabilitación estamos hablando de extender la justicia social, de ayudar a los que menos tienen, de aportar algo a la ciudad sostenible", de una "rehabilitación integral", en definitiva. "No es de recibo invertir un solo euro público en arreglar la fachada de un edificio cuando la estructura presenta deficiencias. El fraccionamiento que está haciendo la Comunidad de Madrid va en este sentido, lo que supone volver al fachadismo de años pasados", remachó el sociólogo. Integral significa también invertir en zonas verdes, equipamientos sociales y otros recursos para las personas con menos posibilidades económicas. Integral implica, de igual forma, el fomento de una participación de abajo arriba de los afectados, "desde las comunidades de fincas", que incluya no sólo a los propietarios sino también a los inquilinos, ya que también forman parte del barrio y, por ello, "no pueden asistir como meros espectadores", sostuvo Pérez Quintana. "Hay que empoderar a las comunidades de vecinos; se supone que el cliente siempre tiene razón, pero para eso no sólo tendrá que tener razones sino también que les dejen expresarlas", concluyó el autor de *Lavapiés. Intervención y rehabilitación. 1998-2008*.



Las asociaciones y personas interesadas en la investigación pueden solicitar un ejemplar en la sede de la FRAVM.

>> La **Coordinadora de AAVV de Coslada** ha promovido la creación de una nueva plataforma ciudadana con objeto de impulsar reivindicaciones históricas que se encuentran paralizadas por conflictos partidistas. La construcción del enlace con la M-45, la instalación del colector para evitar las inundaciones que, cada vez que llueve, se producen en el Barrio de Santiago y la construcción de viviendas de protección oficial son algunas actuaciones pendientes de ejecución cuyo desbloqueo depende del Gobierno regional.

>> El vecindario de **Aravaca**, que tardó 20 años en ver desaparecer la alta tensión de sus cabezas, lleva más de un año y medio a la espera de que retiren las torres y cables abandonados. Si, tal y como ha prometido Iberdrola, su desmontaje no se produce “antes de que termine el primer trimestre de 2011”, la AV Osa Mayor ha asegurado que volverá a sacar su protesta a la calle. Por otro lado, la entidad ha enviado cartas a Gallardón y al Defensor del Pueblo para protestar por la discriminación que sufre Aravaca y explicar las razones por la que pide ser un distrito independiente.

El metro llega por fin a La Fortuna de Leganés

El pasado 5 de octubre, La Fortuna de Leganés ponía fin a su histórico aislamiento con Madrid al quedar inaugurada la prolongación de la línea II de Metro. La apertura de una estación del suburbano en el barrio supone una importante aunque incompleta victoria ciudadana. La asociación vecinal del ámbito, que se felicita por este hecho, sigue demandando la conexión con Metrosur y la mejora de las actuales comunicaciones con Leganés.

Han hecho falta decenas de actos de protesta para lograrlo. El vecindario, con la asociación Nueva Fortuna a la cabeza y el apoyo de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés y de la FRAVM ha protagonizado encierros, el registro de 14.000 firmas de vecinos de un barrio que cuenta con 25.000 habitantes, manifestaciones e incluso el corte de la autovía de circunvalación M-40. Pero por fin, el 5 de octubre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, oficiaron la consecución de la esperada conquista ciudadana: la inauguración de la estación de metro La Fortuna. Desde entonces, la zona, que se encuentra encajonada entre las autovías M-30 y M-40, disfruta de una conexión directa con el centro de la capital, a través de la línea 11 del suburbano. La nueva parada, que se ha construido bajo el parque Serafín Díez Antón, enlaza con La Peseta (Carabanchel) y permite acceder, en poco más de 15 minutos, al intercambiador de Plaza Elíptica, y de ahí a la línea 6 y a numerosos autobuses urbanos. Para su puesta en marcha, el Gobierno regional, que ha invertido 201,5 millones de euros de los fondos FEDER de la Unión Europea, ha tenido que realizar 3,2 kilómetros de túnel y remodelar parte de la zona verde, que ahora cuenta con tres aparcamientos para bicicletas, un carril bici remodelado, así como nuevos juegos infantiles y zonas de paseo.

La apertura de la estación se ha producido casi dos años más tarde de lo prometido. Tras una incisiva campaña vecinal que se prolongó durante más de dos años, el 26 de marzo de 2007 la presidenta regional colocó la primera piedra de las obras de prolongación de la línea 11, comprometiéndose a que finalizasen en 23 meses. Ante los retrasos, la asociación vecinal Nueva Fortuna, que en todo este tiempo ha liderado la movilización ciudadana y ha hecho las veces de sujeto interlocutor con la Administración, se vio obligada a recordar a ésta sus obligaciones y promesas. A pesar de la inmensa alegría del vecindario por haber logrado acabar con un aislamiento histórico, la entidad ciudadana lamenta que se haya perdido la oportunidad de conectar el barrio con Leganés. “Hemos conseguido la llegada del metro después de una larga pelea, pero no han tenido en cuenta nuestra propuesta de prolongar la línea

“Hemos conseguido la llegada del metro después de una larga pelea, pero no han tenido en cuenta nuestra propuesta de prolongar la línea 10 y unir La Fortuna con Metrosur”, sostiene la AV Nueva Fortuna.

10 y unir La Fortuna con Metrosur”, sostuvo la presidenta de la asociación, María Ángeles Picó, el día de la inauguración. “El problema es que nosotros necesitamos ir a diario a Leganés para ser atendidos en los centros de salud o en el hospital o para realizar cualquier tipo de gestión en el Ayuntamiento, y los autobuses siguen tardando mucho”, aseguró Picó, que no ocultó su temor a que se redujese el servicio de buses con la excusa de la llegada del suburbano.

En sintonía con las asociaciones vecinales de Leganés, el portavoz municipal de IU, Raúl Calle, indicó el mismo día que “el proyecto se queda corto” y lo estará hasta que “nos unan con Leganés”, mientras el alcalde de la localidad anunció que había pedido a Esperanza Aguirre la ampliación del Metro desde La Fortuna a la línea de Metrosur. Hasta que esto no se lleve a cabo, la entidad ciudadana del ámbito reclama un mejor servicio de autobuses entre el barrio y el centro urbano.

El precio del billete es otro aspecto de polémica. “¿Por qué tenemos que pagar 2 euros [por el billete sencillo] en vez de 1 euro, si sólo estamos al otro lado de la M-40?”, se preguntan los vecinos. El hecho de pertenecer a otro municipio no es, para la asociación vecinal, un argumento suficiente para que se dé esta injusticia, por lo que demanda la inclusión de la parada en la zona A del Consorcio Regional del Transporte. La boca de la estación de La Fortuna se encuentra casi en el límite de este área y en la práctica, para llegar a la ella, se ha de transitar unos 14 minutos y medio por la zona A y sólo 30 segundos por la zona B-1.



La crisis como coartada

Según la Encuesta de la Población Activa, en España hay en la actualidad 4,6 millones de personas desempleadas. De ellas, más de 550.000 viven en la Comunidad de Madrid. Lejos de centrar sus esfuerzos en crear empleo y en mejorar el Estado de bienestar, las administraciones públicas han optado por seguir a ciegas el nuevo mantra de los adalides del neoliberalismo: apostar por la consolidación fiscal, esto es, por la reducción del gasto público y el incremento de determinados impuestos. Esta estrategia tiene un doble efecto en los bolsillos de la clase trabajadora: de un lado, en forma de desmantelamiento del pacato Estado de bienestar y, de otro, incrementando la presión sobre nuestro maltrecho poder adquisitivo.

Los presupuestos aprobados por el Gobierno regional y por los ayuntamientos de los municipios, con el de Madrid a la cabeza, responden, salvando las distancias, al mismo patrón. También el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha seguido la misma senda.

Austeridad selectiva

Las cuentas del equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre para el año 2011 no dejan lugar a dudas respecto a la nula voluntad de animar la economía y, por tanto, el empleo apelando para ello al gasto público. El total de los gastos no financieros se sitúa en 16.700 millones de euros, 1.659 millones menos que en 2010.

La renuncia del Gobierno regional a estimular la actividad económica y la ocupación se refleja de manera inequívoca en la disminución, en un 18,4%, de las inversiones reales, que se quedan en 878 millones de euros, 200 menos que el pasado año.

El recorte afecta a la mayoría de los capítulos pero de manera más incisiva a aquellos que articulan el Estado de bienestar: sanidad, educación, vivienda y servicios sociales. Desciende el importe presupuestado en educación infantil y primaria (un 2,9%), en secundaria y bachillerato (un 5,4%), en enseñanza universitaria (un 1,2%), en atención primaria (un 0,7%), en infraestructuras sanitarias (un 22,2%), en construcción de viviendas públicas (un 15%), en rehabili-



FOTO: ANTARICCONNORTE

El recorte aplicado por Aguirre en las inversiones contrasta con la generosa participación de las empresas privadas en los presupuestos regionales.

tación de viviendas (un 43,2%), en atención a los mayores (un 1,9%), en prestaciones económicas a las personas dependientes (un 9,4%), en centros de atención a las mujeres maltratadas (un 10,5%), en apoyo a los inmigrantes (un 50,9%) y así un largo etcétera.

Tampoco se salvan capítulos tan importantes para cambiar el modelo productivo como el plan regional de investigación (que baja un 7,7%) o la innovación (un 15%). Se comprimen las ya ínfimas ayudas a la PYME (un 29,3%). También se contrae un 4,6% la partida destinada a la compensación de los usuarios del transporte público, lo que explica la significativa subida de las tarifas que sufriremos el año próximo. El medio ambiente no sale mejor parado: el dinero destinado a parques naturales baja un 35%.

Con todo, el Gobierno regional hace gala de haber ahorrado a los madrileños unos 15.000 millones de euros en

impuestos desde el año 2003 con una política que ha beneficiado a los contribuyentes que más tienen a costa del incremento de las tarifas del transporte muy por encima del IPC y de la degradación de servicios básicos como las prestaciones a las personas dependientes, la atención sanitaria primaria, las plazas públicas de educación infantil, el deterioro de la escuela pública y la Universidad o la subinversión en parques naturales...

La generosidad fiscal va acompañada de una participación creciente de las grandes empresas privadas en los presupuestos. Los conciertos educativos se llevan 850 millones de euros, el pago por el peaje de las carreteras M-45, M-407, M-511 y M-501 suma 100 millones de euros y los pagos por prestación de servicios privados de sanidad superan los 735 millones, por citar sólo algunos ejemplos.

Madrid, cautiva de la deuda

Ayuntamientos de distinto signo político han seguido la misma receta aplicada por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Es el caso del Ayuntamiento de Madrid, que contempla para 2011 unos ingresos consolidados de 4.586 millones de euros, un 7,4% menos que en 2010. El desglose de los ingresos revela que los madrileños habrán de

hacer frente a la subida de impuestos directos como el IBI, que se incrementa en un 6%. Por otro lado, la capacidad económica del Consistorio se contrae como consecuencia de la caída en picado de los ingresos asociados a la actividad inmobiliaria y su nula capacidad de endeudamiento después de que el Gobierno central no autorizara siquiera refinanciar parte de la deuda que vence en 2011.

La estrategia grandilocuente de las obras faraónicas financiadas con el recurso continuado al endeudamiento –Gallardón quintuplicó la deuda municipal en siete años– ha situado el “debe” de la capital en 7.145 millones de euros, la mitad de la acumulada por el total de los consistorios de las capitales de provincia del Estado.

Así, en 2011, más de un 10% del gasto municipal se habrá de destinar a satisfacer los intereses y la amortización de una deuda de la cual el 40% corresponde a Madrid Calle 30 SA. Ese es el precio desproporcionado de una política fastuosa.

El anverso de esta suntuosa gestión del dinero público se traducirá, en 2011, en la reducción, en un 8,3%, de las inversiones municipales y las políticas sociales. Casi ningún capítulo escapa a la tijera presupuestaria: el de personal baja un 8,4%, gracias a la disminución del sueldo de los empleados públicos y al adelgazamiento de la plantilla y la inversión municipal cae a plomo en un 39%, obligando a suspender casi en su totalidad la construcción de nuevos equipamientos de la ciudad

(centros de mayores, escuelas infantiles, parques...). La política de reequilibrio territorial a favor de los distritos del sur y el este queda, asimismo, paralizada. La mayoría de las actuaciones sufre recortes por encima del 5%: vivienda (29,6%), vías públicas (21,7%), infraestructuras (29,9%), control y calidad del agua (42,6%), dotación de áreas urbanas (15,6%), cooperación con el desarrollo (89,7%), bibliotecas (13,9%), inmigración (9,8%), actividades culturales (13,8%), actividades deportivas (18,9%), empleo y desarrollo empresarial (18,3%), bomberos (7,3%), servicios sociales (5,9%),

Zapatero también opta por privatizar

También el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha optado por seguir la senda neoliberal adoptando algunas medidas contrarias a los intereses de la ciudadanía, especialmente de los sectores más desfavorecidos (personas desempleadas, pensionistas...). Lejos de incrementar la presión fiscal hasta igualarla a la media de la UE, mediante la recuperación de los impuestos sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones, el incremento del gravamen sobre las rentas más altas en el IRPF, la lucha contra el fraude y la economía sumergida, la creación de nuevos impuestos sobre la banca y las transacciones financieras internacionales..., el Ejecutivo central ha promovido la enésima reducción de los ingresos tributarios provenientes del impuesto sobre los beneficios de las empresas.

Suma a ello una reforma de la regulación de las pensiones al margen del diálogo social que recorta derechos adquiridos; la supresión, a partir del mes de febrero, del subsidio de desempleo de 426 euros a las personas en situación de paro que hayan agotado la prestación y una nueva regulación de las agencias privadas de colocación que preludia la muerte definitiva de unos servicios públicos de empleo más necesarios que nunca.

Todos los capítulos del gasto del Ayuntamiento de Madrid caerán en 2011 salvo el de amortización de la deuda, que sube un 14%.

De nada parece haber servido la experiencia de otros países que apostaron por mercantilizar los servicios públicos (EEUU, Gran Bretaña...) privatizando los beneficios y socializando las pérdidas, una apuesta que se ha traducido en la polarización de las rentas y en un acusado empobrecimiento de la base social.

Nos esperan, pues, tiempos difíciles regidos por la consolidación de unas políticas insolidarias, antisociales y antiecológicas. Tiempos en los que habrá que vertebrar una oposición cívica que exija a las administraciones que eleven el gasto público en una triple dirección: el desarrollo de políticas valientes de estímulo de la actividad económica, que tiren del empleo; la profundización del Estado de bienestar en los ámbitos de la salud, la educación, la atención a las personas dependientes, la vivienda y la integración y la cohesión sociales y el impulso de un modelo de economía sostenible. Todo ello aplicando un sistema fiscal basado en los principios de la suficiencia de recursos y la progresividad. Porque no están los tiempos para aplicar modelos que se han demostrado fallidos.

La reforma de las pensiones, la supresión de la ayuda de 426 euros a personas desempleadas y la renuncia a incrementar la presión fiscal de las rentas más altas sitúan al Gobierno de Zapatero en la senda de la doctrina liberal.



Foto: O. CAUO.

Javier López, secretario general de CCOO Madrid

"Tras el 29-S el conflicto sigue abierto y la lucha continúa"

Millones de personas pusieron de manifiesto su rotunda oposición a las antisociales medidas económicas y a los recortes laborales aprobados por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, en la jornada de huelga general convocada por CCOO y UGT el pasado 29-S. El Gobierno, sin embargo, no ha cambiado un ápice las claves de una política que ha demostrado ser ineficaz para reactivar la economía. Ante esto, los sindicatos convocaron paros sectoriales el 15 de diciembre y una gran manifestación, el 18 del mismo mes.

Gaceta Vecinal: CC OO y UGT convocaron las últimas movilizaciones los días 15 y 18 de diciembre para exigir al Gobierno que modifique la reforma laboral, retire la congelación de las pensiones para el año 2011 y abandone su pretensión de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años. ¿Qué objetivos consideran irrenunciables?

Javier López: Lo irrenunciable es que el esfuerzo para salir de esta crisis sea compartido y equilibrado. Un despido más fácil y más barato, la congelación de las pensiones, la vulneración de los acuerdos suscritos con los empleados públicos, las pretensiones de rebajar las prestaciones por desempleo, o los retrasos en la edad de jubilación son cargas sobre las espaldas de los trabajadores, impuestas y desequilibradas. Los trabajadores y trabajadoras, la ciudadanía, no vamos a ser los costaleros exclusivos de esta crisis. El conflicto sigue abierto y la lucha continua.

G.V.: ¿Hubiera habido más margen de maniobra para paralizar la reforma laboral de haber iniciado antes las movilizaciones?

J.L.: Las movilizaciones se convocan cuando se produce una agresión. La agresión se produjo justo antes del verano y el 29-S fue la fecha elegida por CCOO y UGT para la movilización. El 18 de diciembre fue la siguiente fecha para continuar la movilización. Si es mejor antes o después me parece un debate estéril sobre galgos y podencos.

G.V.: ¿Continuarán con el ciclo de movilizaciones en caso de no alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo referido a esas cuestiones?

J.L.: Las movilizaciones van a continuar mientras el conflicto siga abierto. La crisis será larga y los intentos de superarla cargando todo el coste sobre los trabajadores siguen cada día. Por lo tanto las movilizaciones en Madrid, en España y esperemos que de forma cada vez más organizada en Europa, seguirán adelante.

G.V.: ¿Confían en que el cambio en la cúpula de la patronal pueda desbloquear las negociaciones referidas a los convenios colectivos?

J.L.: La cúpula de la patronal española se ha caracterizado por intentar actuar más como un lobby que como una patronal comprometida con el diálogo social en momentos tan duros como los



FOTO: FIAN LLORENTE/CCOO

actuales. Necesitamos que la CEOE supere esta situación, recomponga sus órganos de dirección y apueste por recuperar el diálogo social cuanto antes, para abordar los problemas reales de las empresas y los trabajadores y, entre ellos, el fortalecimiento de la negociación colectiva.

G.V.: ¿Sería la Iniciativa Legislativa Popular por el empleo estable que han promovido el último eslabón de este ciclo?

J.L.: La Iniciativa Legislativa Popular es un instrumento más y no el fin de nada. Será un intento de situar las reivindicaciones y pro-

puestas de los trabajadores en el centro del debate social y político. Implicar y comprometer a los grupos parlamentarios con los problemas de la ciudadanía, cuya principal preocupación es el empleo y la crisis.

G.V.: ¿Cuáles son las claves de las Alternativas sindicales a la política económica y social de Madrid que han elaborado junto con UGT?

J.L.: Madrid no es una isla en el centro de la península al margen de la crisis y del debate social y laboral que vivimos. Por eso, cuando UGT y CCOO hemos elaborado una alternativa sindical por el empleo y contra la crisis, transformando el "Así no" de la huelga general en un "Así sí" para el futuro, nos parecía esencial trasladar nuestras reivindicaciones y propuestas al ámbito madrileño. 546.000 personas paradas, 240.000 de ellas sin ayudas ni prestaciones económicas. Una economía debilitada por la crisis. Un millón de personas por debajo del umbral de la pobreza. Una fiscalidad injusta y desequilibrada. Recursos que disminuyen cada vez más en gasto público y gasto social. Son cuestiones urgentes y graves a las que hay que dar respuesta, también en Madrid.

G.V.: La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos regionales de Madrid contempla aplicar una disminución drástica de los comités de empresa y del número de liberados sindicales. Se suma a ello la desaparición de los escasos órganos de participación social que existían en la región (Consejo de la Mujer, Consejo de la Juventud...) en un contexto de profundos recortes sociales. ¿Cuáles son, a su juicio, los retos de las organizaciones sociales en un contexto como este?

De las 546.000 personas desempleadas de Madrid, 240.000 no perciben prestación económica alguna. A pesar de ello, los recursos disminuyen cada vez más en gasto público y gasto social.

J.L.: La Ley de Acompañamiento vuelve a convertirse en un cajón al que van a parar las peores intenciones del Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Certifica el incumplimiento de los acuerdos sobre derechos sindicales que el propio Gobierno ha firmado con los sindicatos, en un intento de debilitar el sindicalismo, al que se percibe como oposición política organizada y como el sector más vertebrado de la sociedad. Una vez hecho esto, la ley dinamita la arquitectura de participación constituida durante toda la etapa democrática. Destruye los instrumentos de participación creados bajo gobiernos de Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón y hasta en una primera etapa de Esperanza Aguirre. Consejo de la Mujer, Consejo de la Juventud, consejos de promoción económica, Industria, Economía Social, Relaciones Laborales, Salud, Instituto Regional de Cualificaciones, Consejo de Política Territorial y así hasta 103 organismos y empresas públicas. La sociedad madrileña, en su conjunto, debe reaccionar de forma contundente ante este deterioro democrático. No hay que olvidar que el artículo 9 de la Constitución mandata a los poderes públicos a promover la participación social en las políticas públicas.



Fronteras Invisibles:

imágenes
que desvelan
la cara más
dura de la
vida de los
vecinos
inmigrantes



FOTO: DIAGONAL.

Instantánea de Fronteras Invisibles.

Desde el mes de septiembre, a través de la exposición fotográfica *Fronteras Invisibles*, la FRAVM y el periódico *Diagonal* acercan a los barrios y pueblos de Madrid una realidad que el Gobierno sigue empeñado en ocultar: la persecución y el acoso policial que sufren a diario las personas migrantes. La federación ciudadana critica que se detenga y expulse a unos vecinos cuyo único delito es no disponer de documentos en regla.

Aunque el Ministerio del Interior insista una y otra vez en negar la mayor, lo cierto es que la realidad se impone ante nuestros ojos a diario, y con una frecuencia que parece incrementarse cada día. La escena la hemos presenciado cientos de veces: a la salida del supermercado,

en la entrada de un colegio, a las puertas de un negocio de compra-venta de objetos usados, en el vestíbulo de una concurrida estación de metro, en los accesos a un intercambiador de autobuses. Dos o tres agentes de policía (generalmente Nacional) comprueban la documentación

de un grupo de personas con rasgos africanos, latinoamericanos o asiáticos, que, tras haber sido retenidos, aguardan con resignación y muchas veces con miedo, la respuesta de los funcionarios públicos. Si en ese momento disponen de los papeles en regla, los retenidos, que nunca se distinguirán por tener rasgos caucásicos (por ser blancos europeos o americanos) podrán seguir su camino. Si no es así, la mayoría de las veces serán conducidos a comisaría y, tras pasar en el calabozo unas horas, tendrán muchas opciones de ser enviados al Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche. La apertura de un proceso de repatriación podrá acabar entonces con la expulsión definitiva del país y su prohibición de regresar en unos años.

Tal y como han documentado durante más de un año los fotógrafos de *Diagonal* Olmo Calvo, Eduardo León y David Fernández, los autores de la exposición *Fronteras Invisibles*, estos controles selectivos, que en ocasiones tienen carácter de redada masiva, se producen en espacios y tiempos de la vida cotidiana nada extraordinarios: en desplazamientos para acudir o regresar del trabajo, tras dejar a los hijos en la escuela, al hacer la compra,... En contra de lo que



FOTO: DIAGONAL.

Instantánea de Fronteras Invisibles.

indica Interior, su objetivo no va enfocado a reducir la delincuencia sino a "limpiar las calles" de inmigrantes sin papeles, según estos profesionales, que han tenido numerosos problemas con las fuerzas del orden por ejercer su trabajo. Los tres han recibido amenazas policiales para que borrarán fotografías de controles a migrantes de sus cámaras digitales y Eduardo León ha sido detenido en tres ocasiones por negarse a hacerlo.

El proyecto *Fronteras Invisibles*, que tal y como puede verse en el sitio web www.fronteras invisibles.org se acaba de ampliar con imágenes de otros lugares y la aportación de más fotografías, es fruto de un empeño al que no están dispuestos a renunciar. Para los periodistas de *Diagonal*, la presión policial no hace más que reforzar la convicción de que, hoy más que nunca, es necesario sacar a la luz, con toda su crudeza, una realidad injusta que los poderes tratan de ocultar. Convencidas de este hecho, la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), del Gobierno de Ecuador, y ahora la FRAVM, junto al citado periódico, promueven una exposición que, con 35 imágenes únicas, seguirá recorriendo los barrios y pueblos de Madrid a lo largo de 2011. Tras ser inaugurada por todo lo alto en las Escuelas Pías de la UNED, en el barrio de Lavapiés, la muestra ya ha recalado en Lucero (Latina), Alto del Arenal (Puente de Vallecas), Orcasitas (Usera), Valdebernardo (Vicálvaro), Coslada y Comillas (Carabanchel), siempre de la mano de las asociaciones vecinales federadas. En los meses siguientes, tal y como han confirmado entidades ciudadanas de estos lugares, visitará Coslada, Prosperidad (Chamartín), Alcalá de Henares, El Carmen (Ciudad Lineal), San Fermín (Usera) y Cuatro Caminos (Tetuán). Para su organización, ha sido esencial el empuje del Servicio de Dinamización Vecinal de la FRAVM, una de cuyas funciones pasa por fomentar la integración y el respeto de los nuevos vecinos en nuestros barrios. En la mayoría de los espacios donde ha amerizado, la exposición fotográfica se ha completado con una charla o el videoforum de un documental, realizado ad hoc para la muestra, que recoge testimonios de familiares y amigos de migrantes que se encuentran detenidos en el CIE de Aluche o que han sido expulsados tras

Cientos de personas vuelven a pedir el cierre del CIE de Aluche

El pasado 18 de diciembre, en el marco de las actividades del Día Internacional de las Personas Migrantes, a pesar del frío y de la lluvia, medio millar de personas reclamaron el cierre del CIE de Aluche en una marcha que acabó a las puertas de este centro tras recorrer buena parte de Carabanchel. Diversas organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales y vecinales, la FRAVM entre ellas, volvieron a exigir la desaparición definitiva de unos lugares donde las personas encerradas "se ven despojadas de sus más básicos derechos (libertad de movimiento, salud, familia, integridad física y moral, derechos sociales y políticos, etc.) por el simple hecho de no tener unos papeles que las propias autoridades no facilitan siguiendo una lógica de mercado que rechazamos, a la espera de ser deportados a sus países", en palabras de los promotores de la protesta. No es la primera vez que los movimientos sociales madrileños piden en una manifestación el cierre del CIE de Aluche, que acumula decenas de denuncias por vulneración de derechos humanos, pero esta vez lo hicieron en coordinación con otras ciudades. Ese mismo día, Barcelona, Valencia, Málaga, Motril, Granada y Algeciras vivieron también actos por la clausura de este tipo de cárceles para inmigrantes.



Foto: J. Robredo.

pasar por este centro de detención. En muchos de estos actos, las asociaciones vecinales han contando con la colaboración de entidades como SOS Racismo o el Ferrocarril Clandestino, que desde hace meses trabajan con la FRAVM en el marco de la Red Derecho a Tener Derechos.

Precisamente esta coordinadora ciudadana reclamó al Gobierno el pasado 2 de diciembre en la sede de la FRAVM su participación en la elaboración de los reglamentos de Extranjería y de los Centros de Internamiento para Extranjeros. El presidente vecinal, Nacho Murgui, denunció ese día "el oscurantismo y falta de participación"

de un proceso que debería haber concluido hace más de medio año, mientras que Mauricio Aravena, de la ONG Pueblos Unidos, advirtió que "el reglamento es una excelente oportunidad para poner fin a la arbitrariedad de aplicación de la ley". Una arbitrariedad que, tal y como muestran las instantáneas de los periodistas gráficos de *Diagonal*, sufren en sus propias carnes y de manera cotidiana los migrantes sin papeles en los controles policiales de identidad, en sus trabajos y en los CIE, donde la indefensión legal del detenido es norma. "Hoy por hoy la regulación de los CIE depende de la dirección de cada centro y hay una absoluta falta de transparencia informativa", indicó el mismo día Javier Ramírez, de SOS Racismo. Respecto a la realidad que viven estos vecinos en las calles de la capital, Gilberto Torres, de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, confirmó que se siguen practicando redadas y detenciones sin cobertura legal y basadas en criterios raciales, y se continúa primando la expulsión sobre la multa administrativa, vulnerando el principio de proporcionalidad exigido en la Ley de Extranjería.

Calendario de la exposición Fronteras Invisibles

Coslada. Centro Cultural El Cerro. Del 17 al 31 de enero.

Prosperidad (Chamartín). Sede de la AV Valle-Inclán. Del 1 al 15 de febrero.

Alcalá de Henares. Del 15 al 30 de febrero. Amnistía Internacional.

Ventas (Ciudad Lineal). Mercado de Ventas. Del 1 al 15 de abril.

San Fermín (Usera). Albergue de San Fermín. Del 15 al 30 de abril.

Puedes ver el calendario actualizado en: www.fronteras invisibles.org

Las ferias de asociaciones: herramientas de apoyo para el fomento del asociacionismo

El Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana y el Distrito de Villaverde, en colaboración con las asociaciones del distrito, organizaron los días 1, 2 y 3 del pasado mes de octubre, la I Feria de Asociaciones de Villaverde.

Esta iniciativa, concertada entre el Ayuntamiento de Madrid y la FRAVM en el marco de la gestión participada que establecen los Planes de Barrio, surge con la finalidad de desarrollar acciones concretas de fomento del asociacionismo en los barrios o distritos, a través de las que se potencie el tejido social y la participación ciudadana.

Así, la I Feria de Asociaciones de Villaverde, se une a las ya celebradas anteriormente en los distritos de Centro, Hortaleza, Villa de Vallecas, Moratalaz, Fuenarral-El Pardo, Latina y Tetuán.

En este sentido, el objetivo de estas Ferias no es otro que servir de instrumento de difusión de las actuaciones y proyectos que llevan a cabo las propias entidades ciudadanas, así como constituirse en un espacio de encuentro e intercambio del movimiento asociativo del distrito. A lo largo de los tres días de duración de la Feria, se dieron cita en las instalaciones del "recinto ferial" del Auditorio El Espinillo, todas aquellas asociaciones que solicitaron participar en este evento. Fueron 24 las asociaciones que, interesadas en la difusión de sus actividades y programas tanto entre los vecinos del distrito como entre el resto de las asociaciones, participaron en la Feria, bien a través de diferentes activi-

dades, tanto de carácter lúdico como cultural y divulgativo, o mediante el stand puesto a su disposición en el que pudieron informar sobre su actividad, así como mostrar sus materiales e iniciativas e incluso captar nuevos socios.

La puesta en marcha de la Feria de Asociaciones de Villaverde se constituyó como un proceso eminentemente participativo en el que, de algún modo, pudieron participar todas las asociaciones del distrito. El punto de partida fue una reunión, en el propio distrito, a la que se invitó a acudir a todas las asociaciones de Villaverde inscritas en el registro de entidades ciudadanas. En el marco de esta reunión surgió un Grupo Motor, integrado por 7 asociaciones, la propia Dirección General de Participación Ciudadana y la Junta de Distrito de Villaverde que, durante los meses previos a la celebración de la Feria, se reunieron de forma periódica para organizar tanto las actividades desarrolladas, por y a petición de las entidades participantes, como la propia distribución de stands o el diseño final de los materiales divulgativos.

A lo largo de los días de celebración de la Feria de Villaverde, con un alto nivel de asistencia ciudadana, se sucedieron multitud de actividades lúdicas, como conciertos, actuaciones de teatro, bailes, torneos de ajedrez, talleres infantiles y culturales, exposiciones, conferencias y proyección de documentales de las que el público asistente pudo disfrutar, a la vez que conocer en mayor profundidad al movimiento asociativo de su distrito.

La promoción de la participación ciudadana: recursos de apoyo al movimiento vecinal 2003-2010

El Ayuntamiento de Madrid viene desarrollando desde el año 2003 fórmulas políticas inspiradas en el principio general de promoción de la participación ciudadana. La aplicación de este principio

conlleva la implementación de un importante abanico de formas, estrategias y acciones que generan oportunidades y mejoran la calidad de vida del ciudadano madrileño.

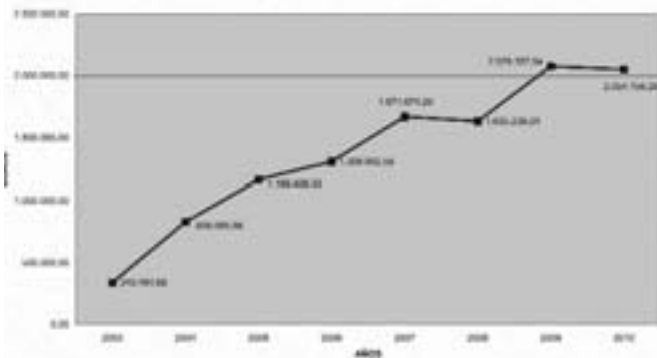
En esta construcción de políticas y programas de desarrollo de la Ciudad tiene un papel protagonista el Movimiento Vecinal, por la intensa intervención manifestada en todos los sectores de la actividad municipal.

Correspondiendo a esta reconocida labor, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto a disposición de las Asociaciones de Vecinos una importante dotación de distintos recursos para la promoción de la participación ciudadana, y desarrollo de estrategias y acciones de ámbito territorial y sectorial, dando efectividad a la participación vecinal y a los procesos de corrección de desequilibrios socioeconómicos de la Ciudad, detectados a demanda de los vecinos.

En el análisis de los recursos municipales puestos a disposición del Movimiento Vecinal en el periodo de referencia, se ven implicadas un total de 7 Áreas de Gobierno, a través de 12 Direcciones Generales y 5 Organismos Autónomos, así como los distintos Distritos.

Se cuantifica en más de once millones de euros, el importe al que asciende el apoyo económico municipal facilitado al Movimiento Vecinal en el periodo 2003-2010, a través de diversos instrumentos (firma de Convenios de Colaboración, subvenciones, contratos realizados con Asociaciones de Vecinos, cesiones de uso). De esta cantidad, algo más de nueve millones de euros ha sido distribuida a través de las distintas Áreas de Gobierno y el resto, por los Distritos.

EVOLUCION DE LOS RECURSOS DIRIGIDOS AL MOVIMIENTO VECINAL
(AREAS Y DISTRITOS) PERIODO 2003-2010



En el gráfico que antecede se plasma la creciente evolución de los recursos puestos a disposición del Movimiento Vecinal en el periodo 2003-2010. El porcentaje de crecimiento de los recursos supone el 603,34 por 100 de la anualidad 2010 con respecto al año 2003, de comienzo del análisis.

Además, el Ayuntamiento de Madrid ha ejecutado un total de 12 obras de remodelación y mejora del entono urbano, a petición directa de las Asociaciones de Vecinos, y cuya inversión supera los veinte millones de euros.

Igualmente, se han facilitado, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo así como de la Dirección General de Patrimonio, cesiones de inmuebles de larga duración, en condiciones económicas notablemente ventajosas con relación al valor por m2 establecido por el mercado. También, es numerosa la puesta a disposición de las Asociaciones de Vecinos de inmuebles para la realización puntual de actos o eventos, en desarrollo de sus actividades.

Asimismo, se ha potenciado la creación de distintos espacios de participación del Movimiento Vecinal para que los vecinos puedan dar a conocer sus demandas, formulen propuestas y se responsabilicen de los proyectos y soluciones adoptadas en la gestión municipal. De esta forma, se materializa la participación de las Asociaciones de Vecinos en 4 Consejos Sectoriales; 21 Consejos Territoriales, 3 Mesas de participación, 1 Entidad Gestora, Junta Local de Seguridad y 7 Comisiones de temática diversa, relacionada con la mejora de la calidad de vida de los madrileños. Cabe destacar, por la participación activa de los vecinos en los procesos, así como por los objetivos de convergencia y cohesión territorial, la intervención del Movimiento Vecinal en las Comisiones de Concertación y Seguimiento de los Planes Especiales de Inversión y Planes de Barrio, donde se han concertado más de 900 actuaciones.

Como conclusión, se pone en valor, una vez más, la colaboración entre el Movimiento Vecinal y la Administración Municipal, que mediante una intensa actividad y la dotación de recursos expuesta, viene progresando en el logro de importantes objetivos para la promoción y consolidación de la participación ciudadana, así como en el avance hacia la convergencia y la cohesión territorial y social de nuestra Ciudad.

I Feria de Asociaciones del Distrito de Villaverde

